



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

**55839/2022 LOMA NEGRA CIA SA (TF 48507-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE
ORGANISMO EXTERNO**

Buenos Aires, 13 de junio de 2023.- AK

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. La firma Loma Negra Cia. S.A. presentó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) un recurso por retardo de repetición "a fin de obtener la devolución del mayor Impuesto a las Ganancias abonado [...] en el período fiscal 2013, como consecuencia de no haber deducido como gasto las multas impuestas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia [...]" (ver fs. 185/205).

II. El Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, rechazó el recurso de Loma Negra Cia. S.A., con costas (ver el pronunciamiento de fs. 280/285).

Es conveniente efectuar una reseña de los fundamentos que conformaron la mayoría.

(a) El Dr. Claudio Luis sostuvo:

i. No existe controversia en que la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción emitió la resolución SCT n° 124 que impuso a Loma Negra una multa de \$ 138.700.000 y a Cemento San Martín (sociedad fusionada y absorbida por la primera) otra multa de \$28.500.000, que aquella abonó con fecha 23 de mayo de 2013.

ii. Las multas cuya deducción pretende la firma actora fueron aplicadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante, "CNDC") por "cartelizar" la comercialización del cemento portland en el país. En este sentido, era útil "[...] recordar que la LDC [ley de Defensa de la Competencia] protege los intereses de toda la comunidad, al castigar conductas que sean contrarias al "bienestar económico general [...]"



iii. Esas multas estaban firmes pues en la tramitación de otra causa ajena a la presente se "concluyó en que correspondía la aplicación de dichas sanciones impuestas por la CNDC. Es decir, en la instancia judicial se tuvo por probada la conducta ilícita de la actora al infringir la LDC".

iv. "Una correcta hermenéutica conduce a considerar que sólo los gastos vinculados a la actividad, y con la finalidad de obtener ganancia, o de mantener o conservar su fuente generadora, resultarán deducibles y en la medida que hayan sido necesarios a tales fines".

v. Yerra la actora en cuanto expresa que las multas le fueron aplicadas por actos vinculados a su objeto social pues éstas "fueron impuestas por conductas ilícitas que jamás podrían formar parte de su objeto social". No obstante ello, "y sólo a efectos del análisis de la cuestión, debe considerarse que el pago en tratamiento guarda vinculación -a modo de consecuencia- con la fuente generadora de renta consistente en la producción y comercialización de cemento portland".

vi. "[E]l pago de una multa (sanción penal) no es efectuado con la *finalidad* -directa o inmediata- de obtener renta, de mantener o conservar la fuente que la genera; porque claramente representa el cumplimiento de una sanción pecuniaria, de innegable naturaleza penal, represiva, punitiva, que tiene como finalidad herir al infractor en su patrimonio".

vii. Esas consideraciones permitían concluir en que los gastos cuya deducción pretendía la firma actora carecían de los elementos requeridos para que fuera procedente.

viii. En el hipotético caso de que pudiera considerarse cumplido el requisito de finalidad, el gasto era claramente innecesario -menos aún imprescindible- para obtener la renta gravada o mantener o conservar la fuente, pues *"tal calificación implica que la realización o no de la erogación tiene algún efecto directo o indirecto en los ingresos del contribuyente o en la fuente que los genera o, en un planteo extremo, que sin esos gastos la fuente perecería o se demerecería, lo que en la especie evidentemente, no es así ('Goldstein, Eduardo', TFN Sala B, 28/05/2004)"*.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

**55839/2022 LOMA NEGRA CIA SA (TF 48507-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE
ORGANISMO EXTERNO**

ix. Otras consideraciones motivaban el rechazo de lo pretendido por la firma actora:

1. La imposibilidad de ese Tribunal de condonar parcialmente una sanción de naturaleza penal, en ese caso, impuesta por la "CNDC", pues considerar deducible en el impuesto a las ganancias a los pagos efectuados en concepto de multas, implicaría, indirectamente condonarlas en la proporción de la alícuota aplicable del impuesto.

2. El último párrafo del artículo 145 del decreto reglamentario de la ley de este impuesto (párrafo incorporado por el artículo 83 del decreto 1170/2018) en cuanto dispuso que "[t]ampoco son deducibles las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales aplicadas, entre otros organismos o autoridades, [...]" debía ser interpretado "como meramente 'aclaratorio' -y además no taxativo- de lo dispuesto en su primer párrafo, que establece como criterio general, que no podrán deducirse 'las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multas...' pero sin referir a ninguna en particular".

3. Toda vez que el pago efectuado por el recurrente fue consecuencia de un accionar ilícito, el mismo podía encuadrarse en el actual inciso 'j' del artículo 88 de la ley de ese impuesto que impide la deducción de "las pérdidas generadas por o vinculadas con operaciones ilícitas".

4. Finalmente, admitir la deducción de esas multas lucía visiblemente injusto, pues la conducta desplegada por la firma actora redundó en la comisión de un ilícito que afectó el interés general de la comunidad y ello no podía dar lugar "a un beneficio como sería su condonación parcial mediante su deducción en el impuesto a las ganancias [...]".

(b) La Dra. Viviana Marmillón consideró:

i. "La suscripta comparte el criterio sostenido por esta Sala "C", en anterior integración, al sentenciar la causa 'Renault Argentina S.A. (3/10/2005) en el sentido que 'la limitación impuesta por el art. ... del



decreto reglamentario [artículo 145 texto según el decreto 1344/98] de la ley del impuesto a las ganancias debe entenderse con relación a aquellas [las multas] que revisten naturaleza fiscal".

ii. "En esa línea de pensamiento, la reforma posterior [al período fiscal en discusión] dada al artículo 145 de la reglamentación mediante el decreto 1170/2018, entendió necesario agregar en su tercer párrafo que 'Tampoco son deducibles las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales aplicables [...]'".

iii. "Posteriormente, con el dictado de la ley 27.430 (B.O. 29/12/17) se sustituye el inciso j) del artículo 88 de la ley, vigente hasta ese momento, impidiendo la deducción de las perdidas generadas por o vinculadas con operaciones ilícitas".

iv. "Así de la economía propia del impuesto a las ganancias dimana el principio de pertenencia de las deducciones a la fuente productora de las rentas gravadas. La causa primigenia de todo concepto cuya deducibilidad se pretenda es su conexión con la obtención, mantenimiento y conservación de las ganancias gravadas [...]".

v. "Ello implica probar la existencia de causalidad requerida para su procedencia y en ese sentido le asiste razón al Fisco Nacional cuando señala que el gasto originado en el pago de las multas aplicadas a la contribuyente no se origina en su actividad, sino en la forma de llevarla a cabo, esto es mediante una conducta contraria a lo dispuesto por la ley de Defensa de la Competencia, por lo que no puede considerarse que se encuentre reunido el requisito de necesidad del gasto que permita su deducción".

III. Loma Negra CIA S.A. interpuso recurso de apelación (fs. 299) y expresó agravios que fueron replicados por la AFIP-DGI (ver fs. 300/319 y 358/371).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

**55839/2022 LOMA NEGRA CIA SA (TF 48507-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE
ORGANISMO EXTERNO**

Preliminarmente, denuncia la invalidez del pronunciamiento al señalar una discordancia argumental existente entre los votos de los dos vocales que conformaron la mayoría.

Plantea que aquellos exhiben una discordancia de fundamentos en varios puntos, por un lado, respecto de la aplicabilidad a la presente controversia de los artículos 88, inciso 'j', de la ley del impuesto a las ganancias y 145 del decreto reglamentario de esa ley.

Por otro lado, considera que tampoco existe coincidencia entre aquellos respecto a si se verificó el requisito de vinculación que habilitaba la deducción del gasto en ese impuesto.

Subsidiariamente, sostuvo las siguientes críticas:

i. La sentencia contradice las disposiciones de la ley de impuesto a las ganancias, pues Loma Negra pagó las multas con la finalidad de "obtener ganancias y conservar y mantener la fuente productora de rentas y, por lo tanto, revisten el carácter de gastos necesarios en los términos de los arts. 17 y 80 de la LIG".

ii. El Dr. Claudio Luis reconoció la vinculación entre la erogación y la actividad gravada, por tanto "conforme a la doctrina y jurisprudencia citada por esta parte [...] las facultades de la AFIP respecto de la determinación acerca de si un gasto es necesario o no [...] son verdaderamente limitadas y solo en casos de impertinencia o irrazonabilidad manifiesta -que no se verifican en el presente- puede desconocer la deducción por no tratarse de un gasto necesario".

iii. Es evidente que, "para que Loma Negra pueda proseguir con el desarrollo de su actividad gravada, le resultaba obligatorio abonar la multa impuesta y, por lo tanto, el gasto se vincula con la obtención de renta, conservación o manutención de la fuente".

iv. La cita del precedente Goldstein a efectos de descartar la necesidad de este gasto es inaplicable pues "mi mandante no declaró quebranto alguno vinculado a las Multas y, además, el vocal preopinante omite considerar que el artículo 88, inciso 'j' considera inadmisibles una



deducción, circunstancia que no equivale a considerar que el gasto no fue incurrido para obtener ganancias y/o mantener o conservar ganancias gravadas".

v. "[S]i bien las multas revisten el carácter de gasto necesario para el mantenimiento o conservación de la fuente productora de las ganancias -tal como ya fue explicado-, su finalidad económica también admite su deducibilidad, por resultar un gasto conveniente al giro comercial de Loma Negra".

vi. "[N]o resultan equiparables las operaciones ilícitas que sean un mero incidente del comercio legal, con aquellas en que la ilicitud hace a la esencia de la operación (vgr. contrabando, estafa). Es en relación con estos últimos casos que la LIG prohíbe la deducción de los gastos vinculados a ella".

vii. El artículo 145 del Decreto Reglamentario de la LIG, que cita el Dr. Luis para considerar que la deducción de las Multas no se encontraría admitida fue incorporado por el decreto 1170/2018 que se publicó en el Boletín Oficial el día 27 de diciembre de 2018, y por tal motivo "no causó ningún efecto sobre la liquidación del tributo de ejercicios fiscales anteriores, por cuanto el propio Poder Ejecutivo omitió atribuirle efecto retroactivo a sus disposiciones".

viii. "[E]l artículo 145 del Decreto Reglamentario, vigente para el ejercicio fiscal 2013, solo consideraba como no deducibles a las multas fiscales, guardando silencio y por lo tanto, permitiendo la deducción del resto de las multas".

ix. El 'actual inc. 'j' del art. 88 de la LIG que el Dr. Luis considera aplicable y que al momento del dictado de la sentencia, es el art. 92 inciso j), de la LIG conforme el tratamiento ordenado según el decreto 824/2019, fue consecuencia del dictado de la ley 27.430 que entró en vigor con fecha 29 de diciembre de 2017, es decir, con posterioridad al período fiscal respecto al cual se solicita la repetición.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

**55839/2022 LOMA NEGRA CIA SA (TF 48507-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE
ORGANISMO EXTERNO**

x. Concluye en que las multas "resultan un gasto necesario en los términos de la LIG y, teniendo en cuenta que no revisten calidad de tributarias, resultan deducibles de la base imponible del Impuesto a las Ganancias".

xi. Subsidiariamente, en caso de que se confirme la decisión apelada, plantea que las costas deben ser distribuidas en el orden causado, pues las circunstancias reseñadas pudieron llevarla a creer que contaba con un mejor derecho.

IV. El planteo de nulidad que la firma actora introduce en esta instancia no puede ser admitido.

Ello es así, pues la lectura de los votos que conforman la mayoría evidencia que ambos vocales coinciden en que la firma actora no acreditó el nexo causal existente entre el pago de la multa y la finalidad de obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto como así tampoco que éste fuera necesario a esos fines (ver el considerando II, letra a), punto v y viii y el considerando II, letra b), punto v).

Ciertamente, el Dr. Claudio Luis afirmó en su voto que "continúa el desacierto [de la firma actora] cuando expresa que 'las multas le fueron aplicadas a Loma Negra y CSM, evidentemente por llevar a cabo actos que hacen a su objeto social...'; porque le fueron impuestas por conductas ilícitas que jamás podrían formar parte de su objeto social".

Luego, como se vio, ese vocal también sostuvo que el gasto era innecesario a efectos de obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por ese impuesto (ver el considerando II, letra a), punto viii).

Si bien es cierto que en aquellos no existe un acuerdo en relación a la aplicabilidad de los artículos 88, inciso 'j' (actual artículo 92, inciso 'j') y 145 del decreto reglamentario -que regulan las deducciones no admitidas en el impuesto a las ganancias- esas consideraciones fueron volcadas por el Dr. Claudio Luis en su pronunciamiento a modo de un *obiter dictum*.



En síntesis, ambos vocales son contestes en que las multas abonadas por la firma actora no cumplían con los requisitos establecidos en los artículos 17 y 80 de la ley del impuesto a las ganancias a efectos de que fuera admisible su deducción y por ello la tacha de nulidad no puede ser admitida.

V. Debe recordarse el contenido de las normas involucradas:

i. En la ley 20.628 (texto ordenado según el decreto 649/1997):

-Artículo 17: “Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga [...]”.

-Artículo 80: “Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina [...]”.

-Artículo 88: "No serán deducibles, sin distinción de categorías: [...]"

j) Los quebrantos netos provenientes de operaciones ilícitas".

ii. En el decreto reglamentario de aquella ley (texto anterior a la reforma de la ley 27.430):

-Artículo 145: "Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 25 de este reglamento, respecto de la deducción de los intereses de prórroga, para establecer la ganancia neta imponible los contribuyentes no podrán deducir del conjunto de entradas las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multas, costas causídicas, intereses punitivos y otros accesorios -excepto los intereses a que se refiere el artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998, y la actualización prevista en la misma-, derivados de obligaciones fiscales, pero sí el impuesto a las ganancias tomado a su cargo y pagado por cuenta de terceros y siempre que esté vinculado con la obtención de ganancias gravadas. [...]".





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

**55839/2022 LOMA NEGRA CIA SA (TF 48507-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE
ORGANISMO EXTERNO**

iii. En la ley 20.628 (según la modificación de la ley 27.430 y el texto ordenado en el decreto 824/2019):

-artículo 92, inciso 'j': "No serán deducibles, sin distinción de categorías: [...] Las pérdidas generadas por o vinculadas con operaciones ilícitas, comprendiendo las erogaciones vinculadas con la comisión del delito de cohecho, incluso en el caso de funcionarios públicos extranjeros en transacciones económicas internacionales".

VI. La lectura del artículo 88, inciso 'j' y del artículo 145 en el texto vigente del período fiscal discutido, evidencia sin lugar a hesitación que se encontraba prohibida la deducción de las multas fiscales y de los quebrantos provenientes de operaciones ilícitas.

En la inteligencia de estas normas se puede advertir que la voluntad del legislador fue evitar que el contribuyente deduzca o compute erogaciones que provengan de actividades ilícitas o que sean consecuencia de un accionar doloso por parte del contribuyente.

En efecto, en relación al primero de ellos, Luis Omar Fernandez reseña que "Jarach sostiene que 'la registración de los activos en la forma y valores establecidos por la ley, es un deber; por el contrario, la deducción de quebrantos es un derecho'. Además, dice que no puede haber derechos no hacerse valer como tales, por la consecuencia de ilícitos" (Luis Omar Fernández, citado, página 453).

Como se vio, la firma actora alega que aquella prohibición no resulta aplicable en tanto refiere a quebrantos, así como tampoco la modificación efectuada por la ley 27.430 pues es posterior al período fiscal discutido (el artículo 92, inciso 'j').

Desde esta perspectiva, y toda vez que las deducciones no admitidas tienen carácter taxativo, "pues sólo la ley puede establecer cuando no se computa un gasto si cumple con las condiciones del artículo" (Luis Omar Fernández, *"Impuesto sobre los bienes personales"*, 2º edición, La Ley, Buenos Aires, 2009, página 443), corresponde, establecer si las multas que



pagó el actor como consecuencia de la sanción que le impuso la "CNDC" pueden deducirse del pago de ese impuesto en los términos del artículo 80 de la ley, que, en este aspecto, complementa la previsión general contenida en el artículo 17 de esa ley .

VII. Es claro el contenido de la ley cuando expresa que los gastos que pueden deducirse son aquellos efectuados para “para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto”.

Al respecto, esta sala ha dicho que es consustancial a la estructura del impuesto a las ganancias que el gravamen recaiga sobre la renta neta establecida en función de las deducciones que se practican sobre la renta bruta y que el gasto a deducir —que la ley conceptúa como todo sacrificio económico o disminución de riqueza experimentada por el sujeto por la obtención de la ganancia gravada, o para poder obtenerla y mantener la fuente que la produce— posea la aptitud de servir al propósito de obtener una renta alcanzada por el impuesto (causa n° 22944/2018, "*Rosenzvit, Dario Javier c/ EN-M HACIENDA AFIP-DGI*" y sus citas, pronunciamiento del 5 de mayo del 2022).

Es decir que donde exista un ingreso que forme parte de la base imponible del impuesto —renta neta— existirán gastos deducibles si, de manera simultánea, respetan la relación de causalidad legalmente ordenada (esta sala, causas "*Aldrey, Florencio c/ Dirección General Impositiva*", pronunciamiento del 13 de junio de 2018 y "*Rosenzvit*", citada).

La doctrina señaló que la deducción de los gastos necesarios para obtener la ganancia o para mantener y conservar la fuente no exige otro recaudo que la comprobación de orden teleológico acerca de que la erogación esté destinada a lograr la ganancia o mantener y conservar su fuente (Dino Jarach, "*Finanzas Públicas y Derecho Tributario*", Abeledo Perrot, 1996, p. 552).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

**55839/2022 LOMA NEGRA CIA SA (TF 48507-I) c/ DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE
ORGANISMO EXTERNO**

En síntesis, "se puede decir que son gastos los rubros que reduzcan o mermen de algún modo el patrimonio y estén enderazados a obtener ganancias" (Luis Omar Fernández, citado, páginas 391).

VIII. Con esa comprensión, el Tribunal Fiscal concluyó en que no se hallaba configurada la apuntada relación de causalidad prevista en el artículo 80 de la ley del impuesto a las ganancias como así tampoco la necesidad del gasto.

IX. Paralelamente, es importante recordar que en la sentencia de fecha 26 de agosto de 2008 de la Sala "B" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, la firma actora y Cemento Avellaneda S.A., entre otras empresas, fueron investigadas por haber participado de "un acuerdo global a nivel país de asignación de cuotas y participaciones (también denominado 'concertación de cuotas' o 'cartelización') en el mercado de cemento portland por medio de la ASOCIACION DE FABRICANTES DE CEMENTO PORTLAND, en función del cual se realizaban concertadamente ajustes de los despachos y las participaciones de cada empresa por provincias o zonas, y se realizaban acuerdos de precios [...]" (ver fs. 33/82 de estas actuaciones, especialmente fs. 34).

Y al respecto aquel tribunal, esencialmente, juzgó que esas empresas realizaron comportamientos que, vinculados con la producción y el intercambio de bienes y servicios (la "cartelización" del mercado de cemento portland), implicaron una restricción a la competencia, generando un perjuicio al interés económico general (ver especialmente fs. 66/66vta. y 68/69 de estas actuaciones).

Por consiguiente, no se advierte la alegada relación entre el pago de las multas y el objeto social de la firma actora, pues el pago de éstas se



originó en una conducta ilícita que no luce vinculada, de manera inmediata ni remota, con la dinámica propia de la empresa para generar ganancias gravadas por la ley del impuesto.

Cabe, pues, concluir en que las erogaciones que se pretende deducir carecen de una relación de causalidad con la obtención, el mantenimiento o la conservación de la “ganancia” vinculada con la actividad de la firma actora.

X. Los restantes planteos que se dirigen a: 1. cuestionar la facultad del Fisco Nacional para desestimar el carácter “necesario” de un gasto; y 2. fundar la deducción en el artículo 80 de la ley se encuentran inescindiblemente vinculados con la prueba de esa relación de causalidad que no está acreditada en este juicio.

XI. En lo que atañe a la forma en que el Tribunal Fiscal impuso las costas, debe recordarse que si bien en el artículo 184 de la ley 11.683 se establece como principio general el criterio objetivo de la derrota, faculta a la sala respectiva a “eximir total o parcialmente de responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad”.

Bajo esa pauta, las circunstancias señaladas por la parte actora en sus agravios a la luz del examen de las constancias de la presente causa no traducen razones suficientes para apartarse del principio objetivo de la derrota y modificar la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal con relación a las costas.

Por ello, las costas de ambas instancias deben ser impuestas a la parte demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

55839/2022 LOMA NEGRA CIA SA (TF 48507-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

XII. Resta pronunciarse respecto de la apelación deducida por ambas partes por considerar "altos" y "bajos" los honorarios regulados en el punto 2º de la resolución del Tribunal Fiscal obrante a fs. 320.

En función de la naturaleza del proceso, su monto, para el que cabe estar a la suma que surge de las resolución apelada, la única etapa procesal cumplida, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, corresponde FIJAR en:

-186,15 y 9,79 UMA -equivalentes a las sumas de \$2.779.777,95 y de \$146.194,07, de conformidad con los valores establecidos en la acordada nº 9/2023 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, los honorarios a favor de los Dres. Demian Konfino y Lucas Sebastián Ormezabal, por la tarea cumplida en el ejercicio de la co-dirección de la parte demandada en la instancia anterior (artículos 16, 20, 21, 29 y demás c.c. de la ley 27.423).

-74,46 y 3,91 -equivalentes a las sumas de \$1.111.911,18 y de \$58388,03, según los valores de la referida acordada- los honorarios a favor de la Dra. María Isolina López Sosa y el Dr. Pablo Martín López Villabrille por la tarea cumplida en la co-representación legal de la parte demandada en la instancia anterior (artículos 16, 20, 21, 29 y demás c.c. de la ley 27.423).

Sobre pautas análogas, corresponde FIJAR en 58,78 y 23,51 UMA —equivalentes a la suma de \$877.761,74 y \$351.074,83 según los valores de la referida acordada— los emolumentos a favor de la Dra. Roxana Beatriz Ferrea y Lucas Sebastián Ormezabal Roberto Alejandro Gómez por las tareas cumplidas en el ejercicio de la representación y dirección legal del Fisco Nacional, ante esta alzada (artículo 30 de la ley 27.423).

En mérito de las razones expuestas, el tribunal **RESUELVE: 1.** Desestimar los agravios de la firma actora, con costas. **2.** Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando XII.

Regístrese, notifíquese y remítase al Tribunal Fiscal.



Se hace constar que la jueza Liliana María Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).

